



El ministro de Economía, Luis de Guindos, urge a los bancos para sacar adelante la reforma financiera anunciada por Rajoy. F. MORENO

Los bancos, forzados a sacrificar resultados para librar sus balances del lastre inmobiliario

SANEAD, MALDITOS, SANEAD

Un par de semanas. Éste es el plazo de que disponen bancos y ex cajas de ahorros para empezar a buscar el dinero para afrontar la reestructuración del sector que el Gobierno quiere poner en marcha con urgencia. Dinero, por un lado, para cubrir el 50% o más de sus activos ligados al *ladrillo* —50.000 millones—, cuyo valor será recortado para acercarlo al precio de mercado. Pero dinero también para cumplir con los duros requisitos de capital de calidad exigidos por la Unión Europea de cara a julio de este año. Para ello, las entidades han empezado a toda máquina con las provisiones, a costa de recortar beneficios en los resultados de 2011 —como ya ha hecho Banesto—, transformar dividendos en acciones y vender activos, mientras en el aire se mascan nuevas, e importantes, fusiones.

Por E. Moreno

Aunque, oficialmente, el pistoletazo de salida lo dará en los próximos días el Consejo de Ministros, lo cierto es que los bancos ya están a la carrera para coger el tren de la reestructuración financiera. El Gobierno, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, co-

mo maestro de ceremonias, ha metido prisa al sector para que se ponga ya manos a la obra con el fin de empezar a sacar adelante cuanto antes una de las “patas” de las grandes reformas —financiera, laboral y ley del déficit— anunciadas por el presidente Mariano Rajoy. Una reforma que, según se le ha transmitido a los bancos, se basará en tres objetivos claros: sanear, provisionar y fusionar.

De esta forma, tal y como ha advertido De Guindos, el Gobierno va a exigir, en primer lugar, elevar el nivel de dotaciones a provisiones necesario para cubrir no ya el 30% de los activos inmobiliarios como ahora, sino probablemente hasta el 50 o incluso el 60%. Esto significará, en términos globales, que los bancos deberán captar unos 50.000 millones de euros suplementarios, para lo que dispondrán de un plazo de dos años. Se trata de una misión muy difícil, por no decir imposible, en el contexto actual, con los mercados financieros cerrados a cualquier operación de captación de capital.

Por eso, las entidades, según han empezado a revelar, van a echar mano de estrategias alternativas para conseguir esos fondos a *pulmón*. Como, por ejemplo, adelantar desinversiones o cambiar acciones preferentes por acciones. En cuanto a los dividendos, cuyo pago a los accionistas es casi sagrado, algunas entidades van a optar por la fórmula intermedia de pagar una parte bajo forma de acciones de la propia entidad.

Pero la cosa se complica todavía más. Además de este incremento de provisiones, las entidades también deberán sanear y hacer más transparentes sus cuentas en lo que a su cartera inmobiliaria se refiere. Esto significa que se les va a exigir a las entidades que, en sus balances, registren esos activos inmobiliarios, así como los créditos concedidos a promotores, ya no con sus valores de antes de la crisis, sino a sus precios actuales, con el mercado hundido. Según algunas informaciones, en las promociones, por ejemplo, puede suponer un recorte de hasta el 50% del valor, mientras que el suelo puede llegar incluso al 80%.

Con estas dos medidas se pretende que los bancos saneen sus cuentas y se libren del lastre que supone para su credibilidad y solvencia acumular, sin la necesaria cobertura de fondos, importantes activos inmobiliarios sobervalorados con respecto a los precios reales de mercado. En todo caso, el sector, que parecía dispuesto a *aguantar* esos activos tal y como estaban hasta ahora para no perjudicar sus resultados, ha acogido, apuntan algunas fuentes, con bastante disgusto las medidas anunciadas por el Gobierno. Entre otras cosas porque, dicen, mete en el mismo saco a todas las entidades, sin distinguir entre las que están más expuestas y las que lo están menos.

Pero el caso es que de alguna forma hay que *depurar* los activos problemáticos relacionados con la construcción que tienen las entidades financieras españolas, y que ascienden a unos 173.000 millones de euros, según los últimos datos difundidos por el Banco de España. Unos activos que, en su mayor parte, revisten un elevado riesgo, lo que ha frenado en seco la capacidad de estas instituciones para financiarse en los mercados, tanto nacionales como internacionales, debido a la desconfianza que tienen los inversores sobre la capacidad de devolución de los fondos.

Y, por si fuera poco, todo esto coincide con el proceso por el cual los bancos y cajas están elevando su nivel de capital básico hasta el 9%, con el fin de cumplir los requisitos de solvencia exigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Para ello, disponen de tiempo hasta mediados de 2012. Pero lo grave es que si el dinero se dedica a provisionar, no cuenta como *core capital* y viceversa, con lo que las necesidades de capital se multiplican.

Esta *limpieza* de balances va a suponer para las entidades un importante esfuerzo y un alto coste, que el Gobierno ha pedido que ya empiece a reflejarse en las cuentas de resultado del ejercicio 2011, que las entidades están a punto de presentar en estos días. El motivo está claro: con la que está cayendo en el entorno económico, presentar unas cuentas demasiado boyantes sería incluso contraproducente. Por el contrario, recortar beneficios parece más acorde con los tiempos y con la política de recortes puesta en marcha por el Ejecutivo.

Por lo pronto, estas provisiones destinadas a sanear los activos inmobiliarios ya le han costado a la banca recortes de más de 1.000 millones de euros sobre sus beneficios entre enero y septiembre de 2011.

Un buen ejemplo, que los expertos consideran que puede dar una importante pista sobre lo que serán los resultados del resto de las entidades, ha sido el de Banesto. La entidad, primera en presentar sus resultados 2011, ha anunciado que ha realizado una dotación de 400 millones de euros para provisión extraordinaria, que se han traducido en una merma de 280 millones en su cuenta de resultados, lo que ha supuesto una reducción de su beneficio anual en un 73%.

Pero con ello, la entidad perteneciente al grupo Santander ha conseguido más tiempo y ampliar –aunque sea hacia atrás– el plazo de dos años que se les marcará a las entidades para lograr estas importantes dotaciones de provisiones suplementarias.

Aunque en una línea similar, el resto de las entidades viven situaciones algo diferentes. Santander, por ejemplo, ya ha anunciado que ha alcanzado el 9% de capital de calidad exigido por Bruselas. Los fondos que necesitaba para ello, algo más de 15.000 millones, proceden casi todos de operaciones financieras internas, como canjes de bonos convertibles, cambios de participaciones pre-

ferentes por acciones, desinversiones (vendió un 4,41% de su filial brasileña) y pago de parte de los dividendos con acciones. El BBVA, por su parte, se apresta a lograr los 6.300 millones que debe conseguir también mediante la conversión de acciones preferentes en bonos subordinados al tiempo que ha realizado un ajuste contable de su negocio en Estados Unidos que le reportarán unos 400 millones en beneficios fiscales. Caixa-bank también va a recurrir al canje de participaciones preferentes para reforzar su ‘core capital’, aunque sus responsables aseguran que no necesita capital suplementario para cumplir con Bruselas. ●

El incierto futuro de Bankia

Pero sin duda, la entidad que se está viendo más comprometida por la exigencia de este doble esfuerzo financiero a corto plazo es Bankia. La entidad que dirige Rodrigo Rato, muy lastrada por el ladrillo –tanto Caja Madrid como Bancaja, a la hora de fusionarse, aportaban un importante lastre inmobiliario–, puede verse en apuros para lograr cumplir con las exigencias dobles de Madrid –6.000 millones– y Bruselas. De ahí que entre dentro de los posibles planes que Economía está preparando para los que no cumplan con el aumento de provisiones. Dos son las alternativas: por un lado, inyectarles dinero, pero no procedente de las arcas públicas –eso aumentaría el déficit–, sino ayudas captadas del Fondo de Rescate Europeo (FEEF). Para que eso sea posible, De Guindos está a la espera de la correspondiente autorización de la Unión Europea.

La segunda vía de salida para las entidades con dificultades serán las fusiones. Desde el entorno de Economía



Rato perdería poder en una megafusión con Caixabank.

ya han apuntado que la idea es que en el mapa financiero español tan sólo queden media docena de entidades, con activos por encima de los 100 a 150.000 millones. Aquí sí parece encajar de lleno Bankia: según insistentes rumores que circulan por medios fi-

nancieros, De Guindos estaría impulsando una posible megafusión entre Bankia y Caixabank, lo que daría nacimiento a todo un gigante del sector. Pero Rato no parece partidario de esta operación, ya que en ella, perdería casi todo su poder, a favor de Isidro Fainé, presidente de la entidad catalana. Por lo pronto, desde la dos entidades han negado que estén abiertas conversaciones al respecto.

Mientras, Rato, que ya tiene su propio *banco malo* con BFA, ha vuelto a pedir al Gobierno la creación una entidad dedicada a concentrar los activos inseguros relacionados con el *ladrillo*. Una alternativa que el Ejecutivo de Rajoy, tras considerarlo seriamente, había descartado debido a las presiones de BBVA y Santander, que se oponen a una medida que, para ellos, no sólo no sería útil, sino que podría resultar contraproducente, en la medida en que tienen la suficiente fortaleza como para ocuparse ellos mismos de sus activos problemáticos.